

España: Sin gobierno a la vista

*MARÍA CONSTANZA COSTA

www.oblat.am

Luego de ocho meses sin poder constituir un nuevo gobierno, con un "gobierno en funciones" (figura contemplada en el art.101 de la Constitución, que tiene paralizadas tomas de decisiones y cuestiones vitales como la aprobación del presupuesto), la investidura ya tiene fecha. Pero esto no implica que el escenario político español, colmado de negociaciones truncadas, elecciones repetidas y ciudadanos que experimentan el sabor amargo de la frustración, se esté tornando un poco más claro. Muy por el contrario, luego de meses de resistencia, Mariano Rajoy, a petición del Rey Felipe VI, ha decidido presentarse a la investidura el próximo 30 de agosto, aunque con pocas probabilidades de conseguirla .La fecha elegida no representa un dato menor: de no producirse un acuerdo, las nuevas elecciones que serían las terceras en el año, se llevarán a cabo el 25 de diciembre. Menudo regalo por parte de los populares para los 36 millones de votantes españoles, que deberían concurrir a emitir su voto entre brindis, guirnaldas y papás Noel, en una situación inédita para el país.

La nueva distribución de fuerzas parlamentarias que arrojaron las elecciones del 26 de Julio exhibe un sistema bipartidista herido gravemente pero que no termina de aún de morir. El Partido Popular logró, nuevamente, ser la fuerza política más votada, consiguiendo 137 escaños, superando lo conseguido en las elecciones del 20 de diciembre cuando alcanzó los 123, pero lejos de los 176 que necesita para gobernar, lo cual hace necesario la conformación de pactos con otros partidos. Los populares parecen haber encontrado un aliado natural, en Ciudadanos, el partido liderado por Albert Rivera, una fuerza de derecha que nacida en 2006 que creció en las parlamentarias europeas de 2014, como opción al bipartidismo, y cuyo lema fue "regenerar la democracia y erradicar la corrupción". Rivera. quien había declarado que nunca apoyaría un gobierno presidido por Mariano Rajoy, fue virando sus posiciones, en un intento por transformarse en un "garante" que le permita al viejo régimen bipartidista seguir respirando, incluso en detrimento de su propio crecimiento como fuerza política, ya que si hubo un gran perdedor en las elecciones del 26 de junio fue Ciudadanos, que disminuyó sus bancas de 40 a 32. En una elección polarizada entre el PP y Podemos, sus votantes castigaron su pacto con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez luego de las elecciones del 20D y regresaron al voto útil a favor del PP. Entre el original y la copia, se quedaron con el primero.

Desde hace largas semanas se hallan en discusión los términos del pacto entre el PP y Ciudadanos, cuyos principales ejes han sido foco de críticas sobre la formación naranja, a pesar de que Rivera afirme que "100 de las 150 medidas" firmadas con el PP son las mismas acordadas con el PSOE luego de las elecciones del 20D. También el hecho de que en puntos sensibles como el empleo y la salud pública, el pacto firmado entre Ciudadanos y

los Populares deje de lado los ciertos acuerdos mínimos. PP y PSOE han prometido a Ciudadanos una mayor proporcionalidad del sistema electoral que históricamente ha beneficiado al bipartidismo. La propuesta de Rivera apunta a un cambo en las circunscripciones por distritos de 250.000 habitantes. Por su parte, el PP ha conseguido introducir la elección directa de alcaldes, aunque no se ha especificado su implementación.

Además, se propone un sistema de listas desbloqueadas, lo que implicaría la desaparición del voto rogado. El punto crucial del Pacto ha sido la "lucha contra la corrupción", en el cual se establece una comisión de investigación parlamentaria sobre los caos de presunta corrupción del Partido Popular, pero se excluyó, a pedido del mismo, la referencia explícita al "Caso Bárcenas", el caso de corrupción más escandaloso que implica a altos cargos del partidarios en la financiación ilegal del PP. Además, el pacto establece eliminar la posibilidad de conceder indultos por motivos de corrupción política. La controversia se presenta al momento de definir qué se establece como figura de corrupción ya el acuerdo sólo contempla los casos en los que hay enriquecimiento personal ilícito o financiación irregular, mientras todos los demás que comprenden inhabilitaciones quedarían encuadrados como "mala praxis".

La antesala del pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, fue un acuerdo para controlar el Congreso, aunque la votación es secreta, los cálculos dan cuenta de que los populares recibieron la ayuda de los partidos nacionalistas, soberanistas e independentistas. Convergencia, PNV y ERC habilitaron con su abstención que fuera elegida Ana Pastor, Ministra de Fomento, frente al socialista Patxi Lopez, que había presidido la legislatura anterior. Tradicionalmente la presidencia de la legislatura es detentada por la segunda fuerza, y esto abrió un panorama sobre cómo podrían llegar a jugar las fuerzas independentistas conservadoras en el escenario de la investidura. Sobre todo teniendo en cuenta que los comicios autonómicos del País Vasco, han sido programados para el 25 de Septiembre y que el PNV sabe que necesitará la ayuda de otros partidos para seguir en su cargo, frente al crecimiento de Podemos en el País Vasco.

Pero aún con Ciudadanos los números para lograr los "sillones" no son suficientes. Esto provoca que todas las presiones del stablishment económico y político para lograr un "pacto por España", recaigan sobre el PSOE, que el 26J realizó la peor elección de su historia y hoy cuenta con 85 diputados, frente a los 90 que había obtenido el 20D, cuando intentó que Sanchez fuera investido. El PSOE no logró ganar en ninguna comunidad autónoma, perdiendo incluso en Andalucía, uno de sus bastiones, a manos del PP. Aún así, logró seguir siendo la referencia de la izquierda, tanto en votos (subió incluso un 0,8 con respecto a diciembre) como en escaños, al no producirse el tan anunciado "sorpasso" de Unidos Podemos. Si bien los resultados electorales no fueron catastróficos, intensificaron aún más las disputas entre los diferentes sectores del partido.

Estas disputas y confrontaciones parecen no manifestarse en relación a posibilitar o no una investidura de Rajoy. Por un lado, Pedro Sánchez se mantiene firme en un "no" rotundo, mientras que los sectores más conservadores del PSOE que representan a los "barones" con Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, se mantiene al margen, prudencia que responde al hecho de que todos tienen su mirada puesta en el Congreso del Partido a celebrarse luego de conformado el nuevo gobierno, en el que Díaz, que cuenta con el apoyo del ex presidente Felipe González, le disputará la presidencia a Sánchez. Manifestarse a favor de la abstención sería de riesgo para mucho referentes, que se verían perjudicados por una pérdida de apoyo de sus bases. Pero Sánchez no solo se niega a apoyar a los populares sino que también ha manifestado que no pose intención alguna de conformar un gobierno alternativo con Unidos Podemos y los sectores que con ellos confluyen. El costo de la falta de iniciativa de Sánchez, para un lado u otro, puede ser alto. Habilitar un gobierno de derecha puede socavar más su base electoral y terminar siguiendo el ejemplo de otros partidos socialdemócratas de la región, como el PASOK griego, que sólo actúan como

subsidiarios de la derecha. Claro que también cabría la posibilidad de conformar un gobierno alternativo, como lo hizo el Partido Socialista portugués, junto con Partido Comunista y el Bloco de izquierda. No demostrar ninguna estrategia podría derivar también en una pérdida significativa de sus bases, lo que dejaría ver la "fractura expuesta" de un PSOE que se resquebraja internamente.

En una situación marginal quedó Unidos Podemos (la alianza de Izquierda Unida más Podemos), al momento de discutir la formación de gobierno. Esta coalición reconoció el balance negativo de las elecciones del 26 J, en las cuales obtuvo 71 escaños (la misma cantidad que ambas formaciones por separado habían conseguido el 20D), pero perdieron más de un millón de votos. Las razones de la derrota fueron analizadas extrayendo algunas conclusiones: por un lado, el bajo perfil que se mantuvo en la campaña, en la cual se optó por apostar a la masividad que aportan los sets de televisión, más que a los grandes actos y a la presencia territorial. Aunque muchos sectores señalaron que el acuerdo con Izquierda Unida pudo haber significado una pérdida de votos para Podemos, haciendo alusión a las diferencias dentro de formación morada entre quienes apoyaron esta alianza (el sector liderado por Pablo Iglesias) y entre quienes la veían con cierto recelo (el sector liderado por Errejón). Se produjo una defensa férrea de este acuerdo, por parte de los referentes de ambas formaciones. No parece haber influido negativamente sobre Podemos ni haberlo situarlo "demasiado a la izquierda", alejándolo de su postura inicial, donde la diferencia izquierda/derecha sería suplantada por la de arriba/abajo, una división entre los intereses de una casta al servicio de los sectores dominantes y los de las clases populares.

Lo cierto es que la sociedad española no acompañó la posibilidad de que una fuerza de izquierda accediera al gobierno, más allá de la expectativa positiva que generó la aparición de nuevas fuerzas políticas que podrían renovar el maltrecho bipartidismo, lo que arrojó la existencia de una base firme de alrededor de 5 millones de votantes que apostaron al cambio. Frente a la agitación de esta "posibilidad real" en el marco de una campaña polarizada entre derecha e izquierda, tanto los medios de comunicación como los partidos tradicionales e incluso una fuerza nueva como Ciudadanos, apuntaron contra Unidos Podemos, fortaleciendo la idea de estabilidad, gobernabilidad y consenso presentes en el imaginario de la cultura política española post franquista, frente a I que denominaron como "aventura populista". Esta posición no hizo más que abonar al fortalecimiento de la derecha, beneficiada por los resultados del Brexit en Gran Bretaña y por el fracaso parcial del gobierno de Syriza en Grecia, que robustecieron el discurso del inmovilismo.

La izquierda española ha sido, en muchos casos, el bastón sobre el cual se ha apoyado el PSOE para gobernar. Por ser una fuerza que lleva solo dos años de vida, Podemos ha conseguido resultados electorales inéditos. Pese a ello, un acuerdo con la "familia socialdemócrata" se presenta como algo imprescindible, si entendemos que se trata de que el Socialismo pueda y quiera arriesgarse a conducir una coalición de cambio con políticas redistributivas y que no deje de contemplar el debate acerca de las autonomías regionales. Es por ello que Unidos Podemos presiona sobre Sánchez para que, frente al inminente fracaso de Rajoy en la primera sesión de investidura, convoque a la formación de un gobierno de cambio. En la campaña se impuso el discurso del miedo, determinante de que para la investidura adquiera peso la idea de una sociedad "agotada" por la inestabilidad política y la "inevitabilidad" de otro gobierno del PP, apelando a una "responsabilidad de Estado", por parte de quienes no se ocupan de garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos.

Los posibles acuerdos para formar gobierno

- Para ser investido en primera vuelta Rajoy necesita una mayoría absoluta (176 votos). Una gran coalición PP-Ciudadanos-PSOE sumaría 254. Sólo con el apoyo de Ciudadanos, le faltarían seis votos.

- Para ser investido en segunda vuelta, el PP necesita la abstención del PSOE, con el apoyo de Ciudadanos. Necesitaría también ser respaldado por PNV (5 escaños) y Coalición Canaria (1 escaño), lo cual lo dejaría en 175 diputados (lo que arrojaría un empate y la investidura no prosperaría), pero aún le faltaría un diputado para lograr más "síes" que "noes", es decir, un diputado que bien vote a su favor o que se abstenga.
- Pedro Sánchez tiene la opción de ser presidente. Podría formar una coalición en términos numéricos, pero es muy difícil que cierre en términos políticos. La suma del PSOE y Unidos Podemos es de 156 escaños, esto es, a 20 de la mayoría absoluta. Si no pudiera contar con Rivera, Sánchez requeriría el apoyo de al menos tres fuerzas nacionalistas, entre ellas ERC y CDC, cuyos votos siempre ha rechazado.

*Politóloga. Investigadora OBLAT

*Colaboraron con la edición de este informe Martín Szulman y Juan Gullo.